

Los economistas y las opciones del desarrollo nacional

En el mundo de hoy son enormes las posibilidades de acción y las responsabilidades sociales del economista y, en general, de todo profesional dedicado a las ciencias que estudian la sociedad. Tales oportunidades y exigencias son todavía mayores en países como el nuestro, con tan graves carencias, con desigualdades lacerantes y abundancia de problemas no resueltos.

Bien que sea el ejecutor consciente e informado de las decisiones de política, bien que participe de alguna manera en la elaboración de ésta, bien que esté al servicio de la empresa o sea miembro de la administración pública, de instituciones de enseñanza o de investigación, el economista ha de tener siempre presente el interés general, el más acorde con la sociedad en su conjunto. Como persona versada en el estudio y manejo de la generación de la riqueza, debe preocuparse por que las relaciones entre los factores productivos correspondan al grado de desarrollo y de participación de éstos. Asimismo, ha de ocuparse de que se distribuya equitativamente lo producido, atemperando las desigualdades y eliminando las ventajas de los pocos que provengan de posiciones de fuerza o de factores estructurales inconvenientes desde el punto de vista social.

Todavía dentro del marco del esquema ideal esbozado en el párrafo anterior, sin duda la función de mayor aliento que puede desempeñar el economista es la de analizar la sociedad. Estudiarla a fondo para desentrañar el complejo proceso que ha hecho de ella lo que es. Conocerla para entender sus debilidades y para apreciar sus fuerzas. Y sobre todo, como un auténtico pensador social, sacar a luz las posibilidades de cambio, allanar los caminos, remover los obstáculos que se oponen al vuelo de las ideas. En suma, propugnar una sociedad mejor. . .

Es cierto que estamos aún muy lejos de ese reino de la utopía. También es verdad que sus vías de acceso distan mucho de ser rectas y claras. Entre los estudiosos, como entre los prácticos de la economía, hay en el mundo desacuerdos fundamentales. Igualmente, existen posiciones diversas, a menudo antagónicas, apoyadas de manera consciente o implícita en intereses de clase, de grupo, de partido o de región. No pocas veces, los economistas —igual que los demás profesionales de las ciencias de la sociedad— están al servicio de los poderosos o defienden situaciones de privilegio. Con frecuencia apuntalan el edificio del *statu quo* o enmascaran las ideas, complicando innecesariamente el análisis social. En ocasiones, en vez de explicar el funcionamiento de la sociedad, facilitando su comprensión al hombre común, lo velan mediante el uso de un vocabulario esotérico no siempre dirigido a lograr claridad y concisión técnica, sino a fabricar un lenguaje comprensible sólo para los iniciados o los miembros de la cofradía. Con todo ello, voluntaria o inconscientemente, hacen de la

economía casi una “ciencia oculta” y la convierten en apoyo eficaz de las ideologías y los propósitos dominantes o en trabas de las transformaciones que dicen perseguir.

En esas condiciones, resulta muy alentador que los economistas mexicanos, agrupados en diversas asociaciones profesionales, se hayan reunido dos veces en los últimos tiempos para examinar públicamente la realidad nacional. La primera en octubre de 1974; la segunda, en abril último, con motivo de su segundo congreso nacional. En ambas oportunidades, los referidos profesionales, preocupados por las insatisfactorias condiciones económicas y sociales de México, han constituido un foro de discusión en el que necesariamente se han analizado las principales opciones del desarrollo del país. De este modo se ha dado resonancia a un añoso debate al cual han contribuido los más destacados pensadores sociales de México desde el siglo XIX.

Conciliar las medidas para resolver lo urgente con las necesarias para atender lo importante fue la preocupación de fondo del último Congreso. Por ello se replanteó la vieja discusión acerca de la estrategia para compaginar la política de coyuntura con la de largo plazo.

En el decenio de los sesenta se aplicó una política que postulaba la estabilidad cambiaria y de precios, con visión de corto plazo, como requisito indispensable para promover el crecimiento económico. Se pensaba que ese crecimiento, por sí mismo, proporcionaría los elementos fundamentales para alcanzar la “modernidad”, con una economía sana, diversificada, que generaba sus propios impulsos para seguir creciendo. Se daba por supuesto que esa “modernidad” llevaría implícita una evolución natural hacia una sociedad con altos niveles de vida, democrática e independiente.

Pero esa estabilidad de corto plazo exigía contener los precios por la vía de la estabilidad cambiaria, limitar el gasto público, sacrificar el ingreso de la agricultura, mantener las cotizaciones de los bienes y servicios del sector público por abajo de sus costos y conservar una reducida carga fiscal que obligaba a un creciente endeudamiento interno y externo.

El impulso dinámico más importante provenía de un sistema proteccionista que propiciaba un proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo y algunas materias primas, que a su vez exigía cuantiosas compras externas de bienes de producción. Por eso, y en ausencia de un esfuerzo exportador eficaz, había una tendencia al aumento del desequilibrio externo, que se traducía en una proclividad a romper la estabilidad cambiaria. Esta se sostenía con endeudamiento externo y con inversión extranjera, la cual al mismo tiempo era necesaria para seguir el camino escogido de sustitución de importaciones. Además, se captaba ahorro externo y se retenía una parte del interno con un favorable ambiente para la inversión y sobre todo para el desarrollo del sistema bancario, que contaba con altas tasas de interés, elevada liquidez de los pasivos y condiciones fáciles de encaje legal. Todo esto interrelacionado con la estabilidad de precios.

Tal como esperaban los defensores de esta política, la estabilidad estuvo acompañada de un fuerte crecimiento: alrededor de 7% anual de 1960 a 1970. Se cumplieron también los propósitos de ensanchar la planta industrial y el sistema financiero. Pero eso fue casi todo. Del otro lado de la balanza quedó una mayor desigualdad social con desempleo creciente, una independencia económica disminuida, un acentuado desequilibrio regional, una industria poco competitiva y dependiente de un mercado raquíptico, una agricultura incapaz de satisfacer la demanda interna, un débil sector público, asentamientos humanos inadecuadamente localizados y con graves situaciones de marginación social. . .

En general los problemas no eran nuevos, pero en todos los casos se intensificaron durante el período. Era materialmente imposible avanzar más por esa senda. Además, casi se agotó la modalidad seguida para sustituir importaciones; las deficiencias de la oferta interna

llegaron a ser considerables, sobre todo en bienes agrícolas, energéticos, acero, fertilizantes, y productos petroquímicos. Por otra parte, la economía mundial, que había experimentado en el decenio de los sesenta una expansión más o menos continua y con precios estables, comenzó a deteriorarse y a registrar altas tasas de inflación, hasta llegar en 1975 a la depresión más profunda de la posguerra.

En ese contexto, en el período 1971-1976 se realizó una amplia rectificación de la política económica. El Estado asumió de nuevo la responsabilidad fundamental del progreso económico, las obras públicas alcanzaron ritmos y volúmenes sin precedente, la inversión estatal permitió eliminar (a fines del sexenio) las deficiencias de la oferta de bienes y servicios públicos y se revirtió la tendencia al estancamiento del sector agropecuario, al tiempo que comenzaban a apoyarse las formas colectivas de explotación de la tierra, como en la etapa ascendente de la reforma agraria. Las actividades estatales de regulación se extendieron o fortalecieron en materia laboral, de protección al consumidor, asentamientos humanos, transferencia de tecnología, inversión extranjera, publicidad, preservación del ambiente, sanidad pública, etcétera.

Todo ello requería ampliar la base financiera del Estado y la carga fiscal subió poco más de 35% de 1970 a 1976; además, se revisaron los precios de los bienes y servicios públicos. Empero, el aumento de ingresos fue insuficiente y el déficit del sector público se elevó de manera considerable, al grado de exigir emisiones inflacionarias de circulante, a pesar del muy alto endeudamiento externo para financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.

Fue necesario un gran esfuerzo de gasto público para cubrir necesidades acumuladas de inversión y gasto corriente. Sin embargo, el nivel de las erogaciones sobrepasó los requerimientos directamente prioritarios, sobre todo al realizarse obras no indispensables. No obstante, es difícil afirmar con seguridad que todo el gasto no prioritario debió posponerse, ya que tuvo efectos muy favorables en la ocupación; de otra suerte, el desempleo pudo haber sido más alto por el estancamiento de la inversión privada.

En el sexenio la tendencia del desequilibrio externo subió debido a la insuficiencia exportadora y de abastecimientos internos de alimentos, acero y energéticos, a la inflación internacional que encareció las compras y a la sobrevaluación del tipo de cambio.

Desde luego, menores niveles de gasto público, actividad económica y empleo habrían permitido sortear buena parte de los problemas mencionados de estabilidad interna y externa, pero ello hubiera entrañado un mayor sacrificio popular (incompatible con los postulados básicos del régimen), sobre todo en materia de empleo, así como dejar que crecieran las deficiencias de producción de renglones básicos. La imposibilidad de cubrir ambos frentes, el de lo urgente y el de lo importante, se debió fundamentalmente a la falta de capacidad financiera para sostener el doble esfuerzo.

La política económica global del sexenio anterior logró cambios importantes en varias áreas; en otras los resultados fueron incompletos o apenas incipientes. Por haber quedado inconclusa la tarea en materia financiera no se consolidaron algunas transformaciones significativas y se elevó considerablemente el endeudamiento externo. Además, éste fue el principal punto débil que precipitó la crisis iniciada en el segundo semestre de 1976. Los progresos en términos de desarrollo regional fueron escasos y sólo al final se aprobó una legislación inicial para regular y planear los asentamientos humanos. Lo mismo puede decirse de la planeación del avance científico y tecnológico, acerca de la cual se presentó un documento completo en el último mes de la Administración.¹ La estructura de la

1. Véanse los editoriales "Planeación de los asentamientos humanos" y "Necesidad de continuidad en la política de ciencia y tecnología", en *Comercio Exterior*, vol. 26, núms. 5 y 11, México, mayo y noviembre de 1976, pp. 519-522 y 1267-1269.

distribución del ingreso y del consumo permaneció inalterada en lo fundamental y no todas las modificaciones fueron positivas. El desarrollo industrial experimentó un gran impulso por el lado de las entidades paraestatales, pero casi se estancó en el sector privado. La reforma agraria se reencauzó hacia las formas colectivas de producción y se fortaleció con repartos adicionales de tierra (en ocasiones a costa de la agricultura comercial) y con la regularización legal de ejidos y comunidades; sin embargo, los agricultores capitalistas y los intermediarios del campo conservaron la mayor parte de su poder.² Como es sabido, todo desembocó en 1976 en una devaluación forzada, en un serio deterioro de la actividad económica y el empleo, y en un recrudecimiento de la inflación.

En ese ambiente de crisis económica se renovó una vez más la administración pública, lo que siempre ha dado oportunidad para revisar la estrategia nacional. Como parte de la última revisión, las medidas financieras han recibido especial atención para sortear las dificultades inmediatas, las urgentes, y resolver los problemas de largo alcance, los importantes. Así, se dice que se ha devaluado la moneda, no la estructura productiva del país, la cual fue fortalecida en los renglones estratégicos por la acción pública de los años recientes. La cuestión se plantea en términos de reconstruir primero los apoyos financieros de la estabilidad interna y externa, pues las bases materiales y los recursos físicos y humanos son suficientes para retomar la senda del crecimiento económico, sin descuidar su calidad como ocurrió anteriormente.

Las posibilidades de exportar petróleo, minerales, café y otros productos primarios constituyen el principal elemento para recuperar y prolongar el equilibrio financiero, pues permiten prever la entrada de montos cuantiosos de divisas y un importante fortalecimiento de las finanzas públicas. El déficit fiscal ha disminuido en términos reales en lo que va de 1977, en parte por el aumento de los ingresos y en mayor medida por la baja del gasto público a precios constantes. Esta última ha tenido un fuerte efecto sobre el empleo, ya que continúa deprimida la inversión privada. La reducción ha sido en su mayoría de erogaciones de capital, lo cual no corresponde del todo a un presupuesto contraccionista, pues ha habido la cíclica retracción de la inversión pública debida al proceso sexenal de revisión e iniciación de proyectos, ahora acompañada por una reorganización del sector público que, aunque positiva, ha demandado tiempo adicional para elaborar y aprobar nuevos programas de trabajo. También se han limitado algunas erogaciones corrientes con base en el decreto de austeridad presupuestal de 28 de septiembre de 1976, que en sus puntos principales impide crear plazas para nuevo personal y adquirir mobiliario, equipo de oficina y de transporte. Además, dicta la eliminación de subsidios para actividades no prioritarias.

La reforma administrativa ha sido el punto de arranque de los cambios de largo alcance emprendidos por el actual Gobierno. En ella se basan dos de sus objetivos de más significación: incrementar la eficiencia del aparato gubernamental y lograr una eficacia superior del instrumento de mayor peso del Estado, las entidades paraestatales. En última instancia, esta reforma apunta a la creación de las condiciones necesarias para poner en práctica un sistema de planeación económica global.

El propósito de esa planeación no puede ser otro que organizar al país para el cambio y hacer reformas de manera programada, con una visión económica, social y política integral, que armonice las medidas urgentes y las importantes.

A fin de contribuir al deslinde de las estrategias que hagan concordar las visiones de corto y de largo plazo y de propiciar la continuación del añoso debate al que se ha hecho referencia, en este número de *Comercio Exterior* se recogen trabajos presentados en el

2. Véase el editorial "Reflexiones sobre la política de desarrollo agrícola", en *Comercio Exterior*, vol. 25, núm. 2, México, febrero de 1975, pp. 119-121.

Segundo Congreso Nacional de Economistas, celebrado recientemente en la ciudad de México. La revista agradece la colaboración de los autores y del Colegio Nacional de Economistas. □

Londres: sin novedad para el Tercer Mundo

La tercera conferencia de los países capitalistas más industrializados, celebrada en la primera semana de mayo en la capital inglesa, tendrá enorme trascendencia para el ordenamiento económico mundial de los próximos años. Puede decirse que las dos “cumbres” anteriores fueron ensayos generales de esta última, aproximaciones de una estrategia ahora plenamente desarrollada por Estados Unidos y expuesta a sus aliados casi como única posibilidad de crecimiento para el futuro inmediato.¹ En Rambouillet y en San Juan de Puerto Rico se trató de alcanzar un mínimo acuerdo entre los grandes países capitalistas y se delineó una estrategia todavía vacilante, aunque los elementos que permitieron elaborarla se encontraban ya en avanzado estado de preparación. Sin embargo, no existía una base firme para apoyarla debido a la precariedad política e incierto futuro del gobierno de Gerald Ford, hijo de Watergate y continuación en muchos sentidos del de Nixon. En esas condiciones, la gran propuesta para después de la recesión tenía que hacerla alguien que pudiera hablar con mayor seguridad respecto al porvenir. Así, correspondió al presidente Carter enunciar la línea que el país centro del capitalismo mundial propone a las demás naciones capitalistas. Además, desde un punto de vista económico, en Rambouillet y en San Juan aún no estaba suficientemente afianzada la etapa de recuperación y las líneas lanzadas entonces eran apenas un ensayo general sujeto a correcciones. Aún no era tiempo de hacer una nueva propuesta de largo alcance.

Ante todo, hay que tener en cuenta que el receso económico de 1974-1975 fue el más profundo desde los años treinta; por ello no podía esperarse una recuperación rápida. La economía capitalista se desenvuelve a través de breves ondas de receso y recuperación que se entrelazan con ondas de larga duración. Las primeras responden casi exclusivamente a factores de corto plazo: el nivel de las ganancias, de los salarios y de la tasa de interés. En las ondas de mayor amplitud influyen factores que operan en el largo plazo: cambios tecnológicos, modificaciones de gran magnitud en los costos de producción, alteraciones sustanciales en la estrategia económica y en la conformación de los mercados. Después de la larga onda recesiva que se inició en los años veinte, culminó en los treinta y finalizó en los cuarenta, con la segunda guerra mundial sobrevino una onda larga expansiva, que creció a impulsos de la recuperación europea y japonesa y de la euforia económica posterior, en cuyo transcurso la economía de los monopolios se extendió a todo el ámbito del Tercer Mundo, asentada en el indiscutible predominio estadounidense dentro del mundo capitalista, que ya debía hacer frente al desafío planteado por el bloque socialista en expansión.

La profundidad del receso económico de 1974-1975, su alcance mundial, los cambios de la estructura monopolística, la lentitud y la vacilación con que la economía capitalista se

1. Véanse “La reunión de Rambouillet” y “La reunión de Los Siete en Puerto Rico”, en *Comercio Exterior*, vols. 25 y 26, núms. 11 y 7, México, noviembre de 1975 y julio de 1976, pp. 1265-1268 y 809-812, respectivamente.

recupera de la crisis, permiten suponer que se está iniciando un nuevo ciclo de larga duración, cuya característica podría muy bien ser la depresión, como sucedió durante los tres decenios anteriores a la última guerra mundial. Esa circunstancia hace más urgente la enunciación de una política para después de la crisis, es decir, una política capaz de afrontar las presiones recesivas de esta etapa y de constituir una propuesta económica aceptable para el conjunto del capitalismo, una estrategia política capaz de sobrellevar con éxito la confrontación mundial con el campo socialista. Ante la heterogeneidad del mundo capitalista, el presidente Carter, representante del poder hegemónico, es el portavoz de esa nueva estrategia.

Entre las múltiples y diferentes facetas de la nueva propuesta, quizá las más espectaculares por la repercusión que han tenido en la prensa internacional sean las que corresponden a las políticas energética y nuclear, estrechamente vinculadas entre sí. El aumento de los precios del petróleo, la posibilidad de tener acceso a nuevas fuentes de abastecimiento a costos mucho más elevados y el rápido crecimiento del consumo mundial de energéticos, particularmente en Estados Unidos, han puesto en el orden del día las estimaciones sobre las reservas mundiales. En julio del pasado año se celebró en Laxenburg, Austria, una conferencia internacional sobre el futuro abastecimiento de petróleo y gas natural, auspiciada entre otros por el Instituto de Formación Profesional e Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR). En el informe surgido de dicha conferencia se afirma que, casi seguramente, habrá recursos adicionales de petróleo y de gas disponibles durante un largo período de transición que se extenderá hasta el momento en que se generalice el uso de fuentes renovables de energía, aunque este lapso se extienda por más de 100 años.

Contrasta con el optimista informe anterior el preparado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que presumiblemente ha servido de base para el programa energético de Carter. En este documento se afirma que en 1985 el consumo energético superará a la producción. La diferencia de apreciación con respecto a los otros estudios radica principalmente en el pronóstico de que la Unión Soviética dejará de exportar petróleo en los primeros años de la próxima década, para convertirse también en un país importador, debido a que sus reservas son menores de lo que se supone.

Sobre la base de tales pronósticos, Estados Unidos se dispone a impulsar un gran cambio en la utilización de las fuentes de energía. El costo de ese cambio se financiará con aumentos del precio del petróleo y con alzas de impuestos al consumidor. El propósito será recurrir, cada vez con mayor intensidad, al auxilio de otras fuentes de energía, entre ellas los esquistos, el carbón, el sol y, fundamentalmente, la energía atómica. Pero la explotación de la energía atómica se proyecta dentro de nuevos moldes, que suponen la reestructuración del programa de reactores supergeneradores, a fin de dar prioridad a formas de producción de energía que impidan la difusión del plutonio como elemento que, a su vez, puede provocar una peligrosa difusión de las armas nucleares. En pocas palabras, si se generalizara la utilización del átomo para la generación de energía con la tecnología actual, nadie podría impedir que el plutonio surgido de esa actividad sirviese para difundir también las armas atómicas.

Todo indica que el propósito central del plan nuclear y energético de Carter es desarrollar otras formas de producción que permitan prescindir por ahora del uso del plutonio como combustible nuclear. Para un país como Estados Unidos, rico en uranio, carbón y petróleo y económicamente capaz de realizar inversiones en gran escala para modificar la tecnología del átomo, el objetivo puede ser complicado pero no imposible. En cambio, esta perspectiva coloca a Europa ante la imposibilidad de competir con Estados Unidos. Tal como viene sucediendo en la industria aeronáutica, es posible que Estados Unidos trate de resguardar para su industria el monopolio de la tecnología más avanzada, relegando a sus aliados europeos y a Japón a una situación de dependencia. Por eso en la "cumbre" de Londres se discutió un programa que no llegó a ser aprobado por todos, pero

cuya aplicación paulatina parece segura, en función de la indiscutible capacidad económica, técnica y financiera de la potencia dominante.

Si el desarrollo industrial de los próximos años siguiera el derrotero aquí señalado, se acrecentaría la capacidad monopolística y centralizadora de la producción capitalista. La amplitud del mercado es decisiva para determinar la capacidad de acumulación y el potencial de reproducción de la economía y ésta, a su vez, es un factor determinante de la carrera armamentista. En este último aspecto, el programa económico se relaciona con la confrontación Este-Oeste. Así, la propuesta nuclear y energética de Carter es una pieza esencial de la estrategia industrial, vista no sólo como meta de la economía capitalista, sino también como base para su desarrollo militar.

Empero, no se trata sólo de la economía industrial. La estrategia es mucho más integral y abarcadora. Al parecer, Estados Unidos está considerando simultáneamente la utilización de la ayuda alimentaria y la economía agrícola como arma de política (sería el desarrollo del denominado "food power"). Esto es, se trataría de sentar las bases que harían de la agricultura un factor clave en el equilibrio de la balanza de pagos, un elemento de presión sobre el resto del mundo y un previsible escalón para el salto de la agricultura estadounidense a una posición monopolística en el mercado mundial.² La perspectiva estratégica trazada por Estados Unidos en Londres y precedida por una gran modificación en sus políticas sectoriales es, por consiguiente, un programa de mayor centralización de la economía capitalista mundial alrededor de su eje integrador: la economía norteamericana. Por eso las discusiones con los aliados son una pieza clave de esta vasta reestructuración del mercado.

Así, se comprende por qué fue Carter el centro de atención de la conferencia de Londres. Estados Unidos define una estrategia que sus aliados resisten, pero que no tendrán más remedio que acatar. La cuestión es saber cuál será el margen de negociación que puedan introducir en el proyecto que se discute. Esos márgenes se irán definiendo y precisando con el tiempo: cada país espera obtener el mayor número posible de concesiones, lo que sin duda dependerá, en gran medida, de la evolución de la economía mundial y del grado de homogeneidad del propio capitalismo estadounidense, porque es indudable que una modificación de tal magnitud no podrá realizarse sin que surjan grandes contradicciones en su seno.

Las naciones que participaron en el cónclave de Londres el 7 y el 8 de mayo³ reúnen entre 50 y 55 por ciento del producto bruto mundial, pero menos de 15% de la población. Sin hablar del resto de los aliados ricos, en el número 10 de Downing Street faltaron los países socialistas y el mundo subdesarrollado. La omisión de los primeros se comprende por propia definición: la estrategia económica es parte de la estrategia militar y ésta, a su vez, es resultado de la necesidad de apuntalar a aquélla. Pero, ¿qué porvenir le espera a la mayor parte de la humanidad, la que habita en los países periféricos, en el marco de las decisiones tomadas o discutidas en Londres?

La estrategia del reordenamiento económico tendrá vigencia a mediano y largo plazo. Antes, es necesario que sus protagonistas se pongan de acuerdo en la política que encarrilará la actual fase de recuperación. La propia tendencia hacia la monopolización ha acentuado el desequilibrio en los pagos internacionales y en el movimiento de capitales.⁴ Las dificultades con el alza continuada de los precios, la competencia y el desequilibrio de las cuentas internacionales llevan a la mayoría de los países, sin excluir a Estados Unidos, a levantar más y más barreras al comercio. El sistema monetario se desenvuelve con grandes dificultades a raíz de la generalización del mecanismo de la flotación, con sucesivas e imprevistas crisis monetarias.

2. Véase "La política alimentaria: ¿instrumento de dominio o de progreso?", en *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 4, México, abril de 1977, pp. 399-405.

3. Véase, en este número, la Sección Internacional.

4. Véase "Peligro inminente de nueva recesión mundial", en *Comercio Exterior*, vol. 26, núm. 11, México, noviembre de 1976, pp. 1317-1320.

Para esta etapa, Estados Unidos necesitaba una política de expansión, que tendría por cometido generar una situación de tranquilidad y conformidad social, imprescindible para ingresar en una era de grandes transformaciones técnicas y económicas.⁵ Esas transformaciones sólo pueden concretarse mediante la aceleración de las inversiones, en medio de una gran actividad económica. Pero el capitalismo mundial ha probado que no puede tensar al máximo su capacidad productiva sin provocar grandes alteraciones en el sistema del intercambio y, por consiguiente, en los mecanismos de ajuste monetario, en las paridades y en el movimiento internacional de capitales. Además, una marcha en ese sentido promovería, en poco tiempo, una retracción de las inversiones, acompañada de fugas de capitales hacia actividades improductivas, con lo que se obtendría un efecto inverso al buscado. Ello ocurriría, sobre todo, teniendo en cuenta que los actuales son momentos de gran inestabilidad e incertidumbre, agravados por el hecho de que aún no se logra uniformar criterios para la aplicación de una política definitiva. Aunque profundamente dividida por rivalidades nacionales, la economía capitalista constituye un sistema mundial, y cada vez en mayor medida.

Por eso, uno de los temas centrales es el referente a la delimitación de una estrategia para llevar a cabo una política para la expansión. Allí volvieron a surgir las contradicciones y Estados Unidos, tanto por la presión de algunos sectores internos, cuanto por la oposición de la República Federal de Alemania y Japón, tuvo que aceptar una estrategia de crecimiento moderado, capaz de no generar más presiones inflacionarias de las que ya existen, y cuyo aumento acrecería los riesgos de entrar en una etapa aún más inestable.

Dentro de esas líneas de discusión, apenas hubo lugar en Londres para examinar las aspiraciones del Tercer Mundo. Las naciones subdesarrolladas sólo podrán disponer de una parte mayor de la riqueza mundial y sólo participarán con mayor vigor en la etapa de expansión (ciclo corto) que ha comenzado, en la medida en que sepan obtener, por vía de la presión política, una relativa modificación concertada en las leyes de funcionamiento del capitalismo monopolístico. Esa es la tarea que la mayor parte de esos países se ha fijado en todos los foros internacionales. Sólo un nuevo ordenamiento económico mundial, unido a tenaces y profundos esfuerzos dirigidos a solucionar los problemas estructurales internos de los países del Tercer Mundo, podrá reparar en alguna medida los efectos del crecimiento desigual y abrirá un camino promisorio a este enorme conjunto de naciones. Sin embargo, ninguna inquietud semejante se planteó en la capital inglesa. Es cierto que en la declaración final se incluyeron algunas frases que pueden abrir cierta esperanza para el porvenir. Sin embargo, a la vista del desenvolvimiento capitalista mundial y de las experiencias recientes, se antoja difícil que esas palabras vayan acompañadas de actos concretos que demuestren la voluntad política de llevar adelante aquellas promesas. Las propuestas generales referentes a las materias primas y al fondo común para estabilizar sus precios no son más que pequeñas concesiones. Ello es fácil de demostrar porque la distribución de los fondos disponibles para el desarrollo, de cuya magnitud no ha habido oportuna definición, estará sujeta a requisitos más duros que los que ya han contribuido al atraso actual. Al parecer, el Tercer Mundo, uno de los grandes ausentes de la reunión de Londres, no ha obtenido nada significativo en ella. En ese caso, el reordenamiento buscado por los países capitalistas poderosos sería sólo una estrategia para ellos. Pero si el subdesarrollo no entra en los cálculos de la humanidad rica, la política para encarar la actual fase de recuperación económica corre el peligro de convertirse en un mecanismo multiplicador de las desigualdades existentes. La reunión de Londres es, entonces, un llamado de alerta para el Tercer Mundo: sólo podrá lograr por su propio y mancomunado esfuerzo lo que parece habersele negado, una vez más, en este cónclave supremo de los más desarrollados. □

5. Véase "Estados Unidos: el difícil equilibrio de Carter", en *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 2, México, febrero de 1977, pp. 227-230.